

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL Y LA REFORMA DEL SISTEMA INTERAMERICANO

Roberto Regalado Álvarez

El presente ensayo sintetiza los resultados parciales de una investigación sobre el papel de la reforma del sistema interamericano como subproceso de la imposición del llamado nuevo orden mundial, cuyo propósito es institucionalizar un cambio cualitativo en la dominación continental, que agudiza la crisis política, económica y social en América Latina y el Caribe. Este análisis abarca las últimas cuatro décadas del siglo XX.¹ La hipótesis planteada es que ese período, el más reciente de la historia contemporánea latinoamericana,² se divide en tres etapas:

- La primera se inicia con el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 y está caracterizada por: la agudización de la crisis económica, política y social creada por el agotamiento de la acumulación “desarrollista” basada en la ampliación del mercado interno de los países de la región; la intensificación de las luchas populares provocada por la crisis —incluida la expansión de los movimientos armados surgidos al calor de la experiencia cubana— y, la ofensiva imperialista contrarrevolucionaria y contrainsurgente que alcanza el clímax con los golpes de estado en Chile, Uruguay y Argentina.
- La segunda se abre en julio de 1979 con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua y representa el desplazamiento hacia América Central del vórtice de la lucha entre las fuerzas revolucionarias y el intervencionismo imperialista —lucha ya decidida en contra de los intereses populares en la mayor parte de América del Sur y en

¹ Este trabajo se basa en los resultados de una investigación sobre los cambios que operan en el sistema capitalista de producción realizada por un colectivo de autores. Ver: Rafael Cervantes Martínez, Felipe Gil Chamizo, Roberto Regalado Álvarez y Rubén Zardoya Loureda. *Transnacionalización y desnacionalización: ensayos sobre el capitalismo contemporáneo*, primera edición en español, Tribuna Latinoamericana, Buenos Aires, 1999; segunda edición, Ediciones Nuestra América, Bogotá, 2001; tercera edición, Editorial Félix Varela, Ciudad de La Habana, 2002, primera edición en alemán, *Imperialismus Heute: Über den gegenwärtigen transnationalen Monopolkapitalismus*, Neue Impulse Verlag, Munich, 2000.

² Aunque, en sentido general, los planteamientos sobre el aumento de la dominación imperialista y su repercusión en la crisis regional son válidos tanto para América Latina como para el Caribe, salvo una mención a Granada, este ensayo se circunscribe a las relaciones entre los Estados Unidos y la América hispano y luso parlante. La omisión del Caribe anglófono y francófono obedece a que el análisis de sus particularidades obligaría a rebasar el espacio disponible.

la isla-nación de Granada—, en cuyo trasfondo se libraba una batalla entre la afirmación de la soberanía de toda América Latina y el intento de someterla a un grado cualitativo superior de dominación foránea.

- La tercera comienza en 1990 con el lanzamiento de la Iniciativa Bush y su contenido fundamental es la institucionalización de un nuevo sistema de dominación continental, a través de la reforma de la Carta de la OEA, los acuerdos de las Cumbres de las Américas y las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Aunque es más fácil analizar el pasado que evaluar el presente o predecir el futuro, se espera que el proceso bolivariano en Venezuela y la elección presidencial de Lula en Brasil marquen el inicio de un nuevo período de la historia latinoamericana, en el cual, si bien todavía no se desatan las fuerzas de la revolución social capaces de encontrar soluciones de fondo a los problemas de la región, al menos sea posible frenar el proceso de transnacionalización y desnacionalización.

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

Desde el tránsito entre la sexta y la séptima décadas del siglo XX, el imperialismo necesitaba reestructurar el sistema de relaciones internacionales. Agotado el crecimiento económico de posguerra y saturados los mercados del “Primer Mundo”, los monopolios transnacionales se veían compulsados a asumir el control directo de los principales recursos naturales, industrias, servicios y mercados de Asia, África y América Latina que, hasta entonces, habían considerado de fácil acceso o catalogado como secundarios y, por consiguiente, se mantenían como propiedad de los estados y las burguesías nacionales de esas regiones. Esta expansión obligaba a imponer patrones económicos, políticos, jurídicos e ideológicos universales, destinados a crear condiciones uniformes para la reproducción del capital en cualquier punto del planeta. No obstante, antes de encabezar esa reestructuración de todo el sistema de relaciones internacionales de posguerra, el imperialismo norteamericano tendría que resolver las contradicciones internas surgidas dentro de sus propios círculos de poder, sofocar las protestas sociales que sacudían a su país y optar por una política exterior conciliadora o agresiva.³

La implantación del nuevo orden mundial se inicia con la avalancha universal del neoliberalismo desatada a raíz de los triunfos electorales de Margaret Thatcher en Inglaterra (1979) y Ronald Reagan en los Estados Unidos (1980). Sin embargo, no es hasta la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la bipolaridad cuando el imperialismo encuentra las condiciones para institucionalizarlo. En el nuevo sistema de dominación, el imperialismo ejerce, de manera directa, cuotas fundamentales de poder político y económico que antes gestionaba con la mediación de las burguesías del “Tercer Mundo”, lo

³ Véase: Rafael Cervantes y otros, *Transnacionalización y desnacionalización: ensayos sobre el capitalismo contemporáneo*, Ed. Félix Varela, Ciudad de La Habana, 2002, pp. 126-127.

que implica la eliminación del margen de soberanía, autodeterminación e independencia del que esas elites subordinadas podían disponer. Este cambio se manifiesta en la adopción de funciones y facultades transnacionales por parte de las grandes potencias imperialistas, en particular, del imperialismo norteamericano; la transformación de los organismos internacionales y regionales, los pactos militares y las instituciones financieras supranacionales en instrumentos encargados de complementar la acción directa de las grandes potencias y, la refuncionalización de los estados dependientes, para que actúen como piezas de una maquinaria de poder dentro de la cual ejecutan políticas locales de factura transnacional.

El diseño de sociedad que se corresponde con el nuevo orden mundial es la “democracia neoliberal”, caracterizada por el culto a la democracia representativa, definida por sus aspectos formales (pluripartidismo, elecciones periódicas, voto secreto, alternancia gubernamental y demás), pero con un estado nacional desprovisto de la capacidad de ejercer el poder político real y, por ende, incapaz de asimilar demandas sociales, en especial, demandas de redistribución de riqueza; un concepto complementario de derechos humanos, que enfatiza las libertades civiles destinadas a legitimar este ejercicio antidemocrático, pero que excluye —incluso cuando los acepta de palabra— la satisfacción de los derechos económicos y sociales y, la conversión del estado dependiente en agente de la transferencia de riqueza al exterior.

LA RESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO

Con recursos naturales, infraestructura, fuerza de trabajo calificada y mercados de relativa importancia, América Latina constituye una de las regiones hacia las que se desborda la voracidad de los monopolios transnacionales, ávidos de apropiarse de los mercados de capitales, bienes y servicios creados por los estados y las burguesías nacionales durante el período desarrollista. Aunque esta concentración transnacional de la propiedad y la producción avanza mediante la absorción y destrucción de los capitales locales —con otras palabras, aunque la transnacionalización provoca el aniquilamiento de la clase capitalista latinoamericana, las elites de la región se someten a ella en virtud de una mezcla de imposición y complicidad.

Por su cercanía geográfica con la principal potencia imperialista, la implantación del nuevo orden mundial en Latinoamérica se produce, en primer término, mediante la reforma del sistema interamericano.⁴ Esto significa que la región no solo debe someterse a los dictados del imperialismo “en general”, impuestos a todos los países dependientes, sino también a los dictados específicos del imperialismo norteamericano. Si bien desde los años sesenta las administraciones de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson se percatan de la crisis de la

⁴ Ver: Tulio Halperin Donghi. *Historia contemporánea de América Latina*, Ed Ciencias Sociales, Ciudad de La Habana, 1978, pp. 313-326 y 406-415.

dominación continental, no es hasta 1991 que George Bush (padre) logra completar la acumulación de premisas que le permiten institucionalizar el nuevo esquema.

Las décadas de los sesenta y los setenta

Francisco Zapata (1990) identifica el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 y el golpe de estado en Brasil de marzo de 1964 como los hechos que marcan cronológicamente lo que hoy, con toda propiedad, se puede definir como el comienzo del período más reciente de la historia contemporánea de América Latina.⁵ Desde los años cincuenta, los avances de la reconstrucción europea provocaban cambios fundamentales en el contexto internacional y la situación interna latinoamericana. El agotamiento del esquema desarrollista de acumulación —ocasionado por la reducción de la demanda mundial de productos primarios— destruía los equilibrios sociales y políticos establecidos a partir de la crisis de 1929.⁶ La saturación de los mercados norteamericano y europeo compulsaba a los monopolios transnacionales a competir por los latinoamericanos. Una mirada retrospectiva evidencia que el imperialismo norteamericano se sentía obligado a destruir las organizaciones de izquierda capaces de encabezar la resistencia contra la nueva penetración monopolista; desarticular las alianzas sociales y políticas establecidas durante el desarrollismo y, transformar al estado latinoamericano —hasta entonces dedicado a la protección y fomento del mercado interno—, en agente principal de un proceso de transnacionalización y desnacionalización.

La etapa de “pacificación social” de Latinoamérica se caracterizó, en su primera fase, por los intentos más directos de destruir a la Revolución Cubana y, en toda su duración, por el enfrentamiento entre las fuerzas políticas y sociales desatadas por la crisis —incluidos los movimientos político militares inspirados en la experiencia cubana— y la represión con que el imperialismo les hizo frente, que no se limitó a aniquilar la lucha armada, sino se extendió a la destrucción de los partidos políticos y organizaciones sociales de izquierda y,

⁵ Francisco Zapata. *Ideología y política en América Latina*, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, México D. F., 1992, p. 217.

⁶ El desarrollismo es “...un esfuerzo por romper los lazos de dependencia con el mercado internacional y con la realización de inversiones locales que permitiesen basar la dinámica económica en el mercado interno. Durante gran parte de las décadas de los años treinta y los cuarenta, los acontecimientos políticos tendrán que ver con la implementación de ese nuevo modelo de desarrollo. Lo que hasta ese momento había sido una industria manufacturera incipiente, ligada al enclave minero o agroindustrial, se convierte en el sector prioritario (...) A la vez, empresarios, frecuentemente inmigrantes, crean nuevas empresas en sectores como el textil y el metalúrgico que se transforman rápidamente en las principales fuentes de abastecimiento de productos manufacturados para el mercado interno. Las inversiones se concentran en las ciudades, lo cual contribuye a mover el centro económico desde las minas, plantaciones y haciendas hacia los centros de consumo. Se intensifica la urbanización y crece la población activa dedicada a labores no agrícolas”. *Ibíd.*, p. 142.

en muchos casos, también de centro y de derecha, hecho comprensible porque no solo se trataba de conjurar la “amenaza del comunismo”, sino de servirse de ella para arrasar con los remanentes del desarrollismo.

La hostilidad contra la Revolución Cubana y el proceso comprendido entre los finales de la dictadura de Trujillo y la imposición del gobierno de Balaguer en República Dominicana, fueron utilizados para afianzar el papel del sistema interamericano como mecanismo de injerencia e intervención, a través de la afirmación del apoyo colectivo a la “democracia representativa”, cuya defensa sería convertida años más tarde en pilar de la doctrina de seguridad hemisférica; la creación de un Comité Consultivo de Seguridad, tras el cual se fraguaba el intento —hasta hoy todavía infructuoso— de crear una fuerza militar interamericana y, la fachada facilitada por la OEA para transformar la invasión estadounidense a República Dominicana (1965) en una ocupación militar y una negociación “panamericana”.⁷

A pesar de los avances en la utilización de la OEA como mecanismo de dominación, el sistema interamericano no ocupó el lugar principal en la “pacificación” de América Latina. La estrategia contrainsurgente recayó en el entrenamiento, asesoramiento y equipamiento de las fuerzas armadas, ejecutado a través del Programa de Asistencia Militar de los Estados Unidos, junto con la ayuda brindada por los servicios especiales de ese país a los demás cuerpos represivos latinoamericanos.

El punto más álgido de las dictaduras militares es el que se inicia con los golpes de estado en Chile (1973) y Argentina (1976). Es preciso resaltar que, en el caso de Chile, no existía la justificación de la lucha armada revolucionaria para fundamentar la acción castrense, sino que el golpe se producía contra un gobierno constitucional y tras una campaña desestabilizadora dirigida por el gobierno de Nixon.⁸

La década de los ochenta

⁷ Véase: Tulio Halperin, Ob. cit., pp. 501-506.

⁸ Cabría preguntarse si es procedente incluir dentro de esta etapa de “pacificación” el lapso de moderación relativa de la política imperialista hacia la región comprendido entre los gobiernos de Gerald Ford y James Carter. Es cierto que, una vez descabezado y desarticulado el movimiento revolucionario, de izquierda y popular en la mayor parte de América Latina —y como resultado de la presión internacional generada por las violaciones de los derechos humanos—, la administración Carter retorna a la vieja práctica imperialista de promover en América Latina el restablecimiento de lo que Lenin definiera como la forma más perfecta de dominación y subordinación capitalista: la democracia liberal. No obstante, con el apoyo recibido de sus predecesores (Johnson y Nixon) y el que continuaban recibiendo de la “nueva derecha” estadounidense, las dictaduras latinoamericanas no solo continuaron ejerciendo el poder durante el mandato de Carter sino que, como anticipo a lo que se produciría en los propios Estados Unidos, el gobierno militar chileno iniciaba en 1976 la reestructuración neoliberal y el gobierno militar argentino lo hacía un año más tarde.

La década de mil novecientos ochenta estuvo caracterizada por una intensificación sin precedentes de las contradicciones entre el imperialismo norteamericano y los círculos políticos y económicos dominantes en América Latina. El alineamiento del gobierno de los Estados Unidos con el de Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas —mientras toda Latinoamérica apoyaba a Argentina—, revelaba que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) solo funcionaba en beneficio de los intereses imperialistas y dentro de la lógica de la guerra fría. La invasión a Granada demostraba la intención estadounidense de volver a recurrir a la intervención militar en la región. El apoyo a las dictaduras entraba en contradicción con los sectores burgueses que —habiendo apoyado o tolerado los golpes de Estado— no habían podido sustraerse a sus consecuencias y clamaban por la “democratización”. En las naciones donde imperaba la democracia liberal, las clases dominantes temían que una intervención militar extranjera en Nicaragua sirviese de catalizador a una ola de protestas que pudiese agudizar los desequilibrios políticos y sociales. En este contexto, la crisis de la deuda externa se convirtió en la principal amenaza a la estabilidad de Latinoamérica.

La política de Reagan no reparaba en “sutilezas” que pudieran agravar la situación de las burguesías latinoamericanas. La “nueva derecha”, cuyo mandato encarnaba, se proponía destruir a las revoluciones cubana, nicaragüense y granadina; intensificar la guerra contrainsurgente en El Salvador, Guatemala y Colombia; utilizar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para aumentar la presencia militar estadounidense en América Latina; criminalizar a la izquierda y, proscribir toda alternativa al neoliberalismo.

Las contradicciones entre los gobernantes estadounidenses y latinoamericanos anularon la efectividad del sistema interamericano durante la década de los ochenta y repercutieron en la creación del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora —más tarde fundidos en el Grupo de los Ocho—, como mecanismo de concertación política latinoamericana, ajeno a la inoperante OEA, para promover una solución política del conflicto centroamericano —que evitase la intervención militar de los Estados Unidos en Nicaragua—, convertido en monotema de las relaciones interamericanas, al que se sumó la política draconiana con que la administración Reagan reaccionó frente a la crisis de la deuda externa. Esta crisis del sistema interamericano colocó en agenda la reforma de la Carta de la OEA, originalmente concebida para sentar las bases que permitieran a los gobiernos latinoamericanos dirimir, en igualdad de condiciones, sus diferencias con el de los Estados Unidos. En dirección análoga apuntaban los llamados al reingreso de Cuba a la OEA, con la intención de incrementar el peso del bloque latinoamericano dentro de la organización. Sin embargo, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, las relaciones interamericanas se estremecían bajo el impacto de la ruptura del orden mundial bipolar de posguerra.

La crisis terminal de la Unión Soviética repercutía en el debilitamiento del apoyo externo a la Revolución Popular Sandinista, que sucumbía en las elecciones celebradas en noviembre de 1990, tras la firma de los Acuerdos de Esquipulas. En un lapso breve, se produciría la

incorporación negociada a la vida política legal del FMLN de El Salvador y la URNG de Guatemala. Incluso, muchos dudaban que la Revolución Cubana pudiese sobrevivir sin la ayuda de la URSS. En ese contexto, el Grupo de los Ocho, al verse obligado a reconocer la efectividad de la política de “doble carril” de los Estados Unidos en Centroamérica,⁹ reconocía también los límites hasta los cuales los estaba dispuesto a llevar sus propias discrepancias con el imperialismo. Este mecanismo de concertación adoptaba el nombre de Grupo de Río para dar cabida a nuevos miembros y aprovechar la experiencia acumulada en función de la defensa de los intereses de las burguesías latinoamericanas, asediadas por la penetración monopolista. Sin embargo, nacía en la era de la unipolaridad mundial y la avalancha neoliberal.

La década de los noventa

Desde finales de la década de mil novecientos ochenta, el Plan Brady institucionalizaba la conversión de la deuda externa latinoamericana en un nuevo mecanismo de dominación y penetración, pero lo hacía bajo la apariencia de flexibilización respecto a la política impuesta previamente por el presidente Reagan. En este contexto, el lanzamiento en 1990 de la Iniciativa Bush, en particular, la idea de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se convertía en catalizador de un giro de ciento ochenta grados en la actitud de los gobiernos latinoamericanos hacia el imperialismo. A partir del esbozo del ALCA, la ilusión del libre acceso al mercado norteamericano no solo sirvió para que los gobiernos latinoamericanos enterraran sus diferencias con Washington y se sumaran a la reforma del sistema interamericano, sino también para vencer su resistencia a pagar los costos de la restructuración neoliberal.

Con la “desactivación” del conflicto centroamericano, la invasión que derrocó al gobierno del Gral. Manuel Antonio Noriega en Panamá (1991) y el inicio de una nueva campaña de aislamiento contra Cuba, el imperialismo completaba la acumulación de premisas para imponer una reforma del sistema interamericano basada en tres pilares: el establecimiento de la defensa colectiva de la democracia representativa como piedra angular de la doctrina de seguridad hemisférica; la imposición del ALCA como mecanismo de institucionalización de la integración dependiente de América Latina y, el aumento de la

⁹ La política del gobierno de Ronald Reagan hacia América Central estuvo basada en el “enfoque de doble carril” (*two track aproach*), consistente en el uso simultáneo de la guerra (contrarrevolucionaria o contrainsurgente), según el caso, dirigido a vencer militarmente al enemigo u obligarlo a aceptar una “solución negociada”, en los términos impuestos por el imperialismo. El respaldo a la política de “doble carril” fue una de las recomendaciones principales de la Comisión Nacional Bipartidista sobre América Central (también llamada Comisión Kissinger), que desempeñó un papel principal en la implantación de lo que hoy se conoce como “consenso bipartidista”, que no es más que la imposición de la ideología de la ultraderecha a todo el espectro político de los Estados Unidos.

subordinación de las fuerzas armadas latinoamericanas, unido al incremento de su presencia militar en la región.

Mediante la aprobación del *Compromiso de Santiago con la democracia representativa* por parte de la Asamblea General de la OEA realizada en Chile en 1991, el gobierno de los Estados Unidos lograba iniciar en sus propios términos, el proceso de reforma de la Carta de esa organización. Una vez afirmado el carácter de la democracia representativa como “única forma legítima de gobierno” en el continente, el imperialismo promovería —y los gobiernos latinoamericanos asumirían como propia— la inclusión de la “cláusula democrática” en todos los organismos, foros y acuerdos regionales, subregionales y bilaterales.

Después de haber sentado las pautas fundamentales del nuevo sistema de dominación continental a través de la reforma de la Carta de la OEA, en la I Cumbre de las Américas, el imperialismo lograba dar un nuevo paso en su institucionalización. Los mandatarios de los 34 países del continente participantes (todos con excepción de Cuba) asumían más de ciento veinte acuerdos y compromisos que dictaban las pautas de su actuación en todos los ámbitos de la vida política —incluidas las esferas militar y de seguridad—, económica, social y cultural; afianzaban la obligatoriedad de cumplimiento de tales acuerdos y compromisos, sujetos a mecanismos supranacionales de control e imposición de sanciones y comenzaban la fase de aplicación, en particular, la negociación del ALCA con la fecha tope del año 2005. Otro paso trascendente se produciría en medio de la histeria desatada por el imperialismo con motivo de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Tras meses de ardua negociación, apenas horas más tarde de la desaparición de las torres gemelas se aprobaba en Lima la *Carta Democrática de la OEA*, que reafirma el compromiso de los gobiernos del continente con la “democracia neoliberal” (ya definida en este ensayo) y oficializa la creación de mecanismos de injerencia e intervención para garantizar su estricta observancia. Si función de garante de los intereses imperialistas lo demuestra la complicidad de la mayoría de sus firmantes con el fracasado golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez en Venezuela (2002).

Los propósitos de este entramado de acuerdos de defensa de la democracia representativa son, en ese orden estigmatizar, discriminar y aislar a Cuba, por ser el único país en que no impera el sistema capitalista; implantar y legitimar un mecanismo intervencionista capaz de frustrar el triunfo de futuros procesos de orientación popular en América Latina y, evitar que las fuerzas armadas de algún país de la región, por intereses propios, puedan protagonizar un golpe de estado no autorizado, que ponga en riesgo el nuevo sistema de dominación.

En relación con el ALCA, aunque el proceso de negociaciones aún se encuentra en curso, es previsible que el imperialismo norteamericano no logre el ciento por ciento de sus objetivos con la esperada firma de ese acuerdo en el año 2005. Al haber obligado a

trasladar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la solución del diferendo en torno a las compras gubernamentales, la propiedad intelectual y la protección agrícola, parece que el gobierno de los Estados Unidos deberá renunciar a la idea de que el ALCA sea un acuerdo de “una sola pieza”, que sus contrapartes latinoamericanas se vean obligadas a aceptar en bloque. Sin embargo, ese acuerdo institucionaliza un esquema de dominación y subordinación política y económica que presupone la renuncia a una integración latinoamericana independiente y consolida la desintegración de las cadenas productivas nacionales.

En el plano militar, si bien el imperialismo norteamericano no ha logrado vencer las resistencias a la creación de una fuerza interamericana de defensa, esa limitación la suple mediante el incremento del control sobre las fuerzas armadas de la región y el aumento de su presencia militar directa, amparadas en la lucha contra el narcotráfico y la “narcoguerrilla”, que alcanzan su máximo desarrollo —hasta el momento— a través del Plan Colombia y la Iniciativa Andina. Un impulso adicional, que sirve de colofón al nuevo esquema de seguridad interamericana, es la histeria de “combate al terrorismo”, destinada a criminalizar la resistencia y la lucha popular.

CONSIDERACIONES FINALES

Poco después de un siglo de la Conferencia Panamericana de Washington, el imperialismo norteamericano ha logrado, en lo fundamental, institucionalizar un sistema integral —político, económico, militar e ideológico— de dominación y subordinación de América Latina, basado en que los gobiernos dominados y subordinados —y las clases que ellos representan— hacen suyos, en parte por imposición y en parte por complicidad, los fundamentos de su propia dominación y subordinación.

El sistema interamericano ya no es solo, ni siquiera en primera instancia, la OEA —y muchos menos instituciones obsoletas como la Junta Interamericana de Defensa (JID), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ahora, por sobre ellas se erigen las Cumbres de las Américas y el proceso de negociación-imposición del ALCA. Pero no solo eso, todos los organismos, mecanismos y acuerdos, continentales, regionales, subregionales o bilaterales, preexistentes o establecidos a partir de 1991, guarden o no relación con el sistema interamericano, asumen las bases de la nueva dominación transnacional, mediante el eufemístico compromiso ritual con la “democracia representativa”, los “derechos humanos” y la “economía de mercado”. Sin embargo, puede asegurarse, con toda propiedad, que ese sistema “cuasi perfecto” es un gigante con pies de barro.

Al basarse en la integración transnacional, exclusiva, vertical y fragmentaria de aquellos bolsones de las economías y aquellas elites tecnocráticas latinoamericanas que al imperialismo le interesa incorporar a la rotación global del capital, esos bolsones y esas elites quedan cercenados del resto de la “nación” dentro de la cual siguen físicamente

ubicados. Esa “integración desintegradora” destruye la estructura y el sistema de alianzas socioclasista antes existente en América Latina, pero no logra sustituirlos por otros capaces de establecer un nuevo equilibrio social.

Sin menoscabo de las contradicciones antagónicas inherentes a su naturaleza capitalista, a las que se añade su carácter dependiente, el estado latinoamericano “nacional desarrollista” se asentaba en una estructura y un sistema de alianzas socioclasistas —burguesía industrial, burguesía exportadora, capas medias y proletariado— que, según el país, con mayores o menores dificultades, cumplieron dos funciones básicas de la dominación la redistribución de cuotas de poder entre los distintos sectores de las burguesías nacionales y la cooptación de una parte de los grupos sociales subordinados, destinada a facilitar el control y represión del resto. Estas son las funciones que el estado neoliberal resulta incapaz de cumplir.

El estado neoliberal latinoamericano no puede redistribuir cuotas de poder para zanjar las contradicciones dentro de burguesías polarizadas entre los sectores dedicados a las finanzas, los servicios y el comercio internacional —que logran convertirse en apéndices del capital financiero transnacional— y los sectores productivos y de servicios orientados al mercado interno, que ya son “especies en extinción”. Tampoco puede mantener el status que ocuparon las capas medias urbanas, principales beneficiarias de los servicios públicos del estado desarrollista, cuyo lugar ocupa hoy una elite de tecnócratas empleados por los monopolios transnacionales, que reproduce el modo de vida y la ideología del “Primer Mundo”, del cual se considera parte. Menos aún puede cooptar a los sectores populares, porque los obreros, de manera irremediable, nutren las filas de los desempleados, los subempleados y los informales, mientras los campesinos desaparecen y crecen los trabajadores rurales sin tierra.

Es más fácil hacer el diagnóstico de la situación del mundo —y, dentro de él, de la situación e América Latina— que encontrarle soluciones. Del nuevo sistema de dominación se deriva una contradicción cuya solución aguarda por un nuevo parto de la historia: el imperialismo contemporáneo depreda, con intensidad sin precedentes, la economía, la sociedad y el medio ambiente —al punto de arrojar dudas la supervivencia misma de la especie humana—, pero también desarticula los cimientos del estado nación, que constituye el escenario histórico de las luchas populares, tanto las orientadas a la reforma como a la destrucción y sustitución del estado burgués. Esta es una de las razones por las cuales existe en la actualidad mayor desarrollo de la resistencia social que de la construcción de alternativas políticas populares, tanto a escala mundial como continental. A ello obedece que la Revolución Cubana esté hoy bloqueada por los Estados Unidos y hostilizada por la Unión Europea, que el proceso bolivariano en Venezuela deba enfrentar a la reacción interna y foránea, y que un gobierno de orientación popular como el de Lula en Brasil no pueda avanzar con el paso rápido que, sin dudas, desearía. Pero las soluciones nacen de la crisis y la crisis ya está “tocando fondo”.

La premonitoria frase de Rosa Luxemburgo, “socialismo o barbarie”, adquiere hoy renovada vigencia y dramatismo porque nos obliga a reafirmar nuestro compromiso con el socialismo, pero también deja planteada la inquietante posibilidad de que, debido a omisión, retraso o desviación en la lucha por construirlo, el mundo quede sumido, de manera definitiva, en “la barbarie”. Pero ese tema rebasa los alcances de este artículo.